

El éxito forestal de Costa Rica

JUAN FIGUEROLA

“ Cuando un país decide impulsar el desarrollo forestal, y lo hace con políticas y mecanismos adecuados, la historia que escribe no puede ser más que una historia de éxito. Así lo ha demostrado Costa Rica... Se han establecido políticas y planes, y se han creado mecanismos innovadores para financiar y hacer sostenible el desarrollo forestal del país. El resultado es un sector forestal en franco crecimiento, con propuestas y metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal elaborado en 2001, y con una gran experiencia que mostrar al mundo, para que otros países tomen como referencia lo que les pueda ser de utilidad”. Estas palabras del ingeniero forestal Jorge Rodríguez encabezaron la presentación del libro *El éxito forestal de Costa Rica*, en enero de 2002. En aquellos tiempos, don Jorge era director del Programa Global de Bosques (Profor), y hoy es viceministro del Ambiente.

A inicios del actual Gobierno, el presidente Óscar Arias y su comitiva viajaron a Nueva York, se reunieron con el exmandatario Bill Clinton, y conformaron una coalición para la protección de los bosques lluviosos alrededor del mundo, liderada por Papua Nueva Guinea y Costa Rica. Mientras esto acontecía en el escenario mundial, dentro del país el Gobierno anunciaba el agotamiento de la madera. De la mano con la Cámara Costarricense Forestal, el Gobierno preconizaba un “plan de contingencia” cuya meta era la explotación de 140.000 hectáreas de bosques durante siete años, a razón de 20.000 hectáreas por año, bajo el pretexto de hacerle frente a una “demanda insatisfecha”.

En realidad, esto es parte de un plan mayor que obedece a intereses particulares de ciertos grupos político-empresariales. Entre otros, a los intereses de los industriales madereros que no dan su brazo a torcer en su afán por volver a implantar la modalidad de pagos por servicios ambientales a la tala selectiva, oficialmente denominada “manejo de bosque”, modalidad que fue suprimida a partir del año 2003, tras una tenaz campaña ecologista.

Antes de 2003, existían dos modalidades de pagos por servicios ambientales para bosques: manejo y protección. El “manejo” consiste en talar selectivamente y extraer cinco o seis árboles por hectárea con las mejores características comerciales, utilizando tractores que, a su paso, destruyen la regeneración natural y erosionan los frágiles suelos forestales, seguido de “prácticas de liberación”, que nada tienen que ver con ningún partido político ni con doctrinas religiosas, sino con la eliminación sistemática de la vegetación no maderable (arbustos, bejucos).

Las tarifas que pagaba el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), por hectárea y por cinco años, eran: 79.160 colones por protección y 123.540 colones por manejo. Quiere decir que, además de generar jugosas ganancias por concepto de la venta de madera no cultivada, la tala selectiva era subsidiada mediante pagos por servicios ambientales, con tarifas mayores que las asignadas a la protección de bosque. Así, los pagos por servicios ambientales para manejo terminan siendo un subsidio a la tala selectiva que calificamos de inmoral, pues por medio de este financiamiento se favorece una actividad que por sí misma es rentable y no requiere ningún tipo de subsidio, mientras se le restan recursos financieros a la protección de bosque. Además, al financiar una actividad que daña el ambiente, se pervierte el concepto de servicios ambientales.

Por otro lado, persiste el interés de los madereros por la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo Forestal concebido y coordinado por instituciones como la Oficina Nacional Forestal (ONF) y la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), que siempre han estado al servicio de ese sector. En su momento, los ecologistas denunciábamos que no es cierto que el Plan Nacional de Desarrollo Forestal sea producto de un proceso participativo y democrático. Al contrario, las listas de asistencia de personas bien intencionadas, cuyos aportes no se tomaron en cuenta, fueron utilizadas para validar un plan que atenta contra la integridad ecosistémica de los bosques y contra el bienestar de las comunidades rurales. El plan de contingencia del Gobierno también obedece a las presiones de otros poderosos grupos: los exportadores agroindustriales y los especuladores inmobiliarios.

El autor, ingeniero forestal y ecologista, es coordinador del Grupo de Trabajo de Bosques de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon).



Tarimas estibadas en una plantación de melina en el cantón de Corredores

Juan Figuerola

A las puertas de un Tratado de Libre Comercio hecho por y para las transnacionales, los monocultivos en expansión que demanda nuestro principal socio comercial (banano y piña, principalmente), requieren una producción sostenida de tarimas -aunque no necesariamente sostenible ni sustentable-, las cuales se usan por una única vez y, al llegar a su destino, se desechan. Y, por supuesto, tienen que ser baratas.

Durante los últimos años, las plantaciones han sido consumidas, hasta prácticamente agotarse, para satisfacer esta demanda. En el país del “éxito forestal”, las efímeras plataformas tienen más importancia que los muebles, las puertas, las piezas estructurales y demás usos que ofrece una madera tan versátil y noble como la melina. Las maderas producidas en las plantaciones que tanto dinero y esfuerzo le han costado al país, terminan convertidas en un producto de poca monta, con cero valor agregado y con una vida útil insignificante. ¿Acaso no hay otras opciones? ¿No podrían los exportadores estimular la fabricación de tarimas con materiales plásticos reciclados y de esta manera contribuir a la limpieza de alcantarillas, ríos, lagos y mares de Costa Rica? ¿No contribuiría esto a mejorar el desempeño ambiental del país y a reducir la “demanda insatisfecha”?

Por otro lado, el sector de la construcción y sus aliados, los especuladores inmobiliarios y los empresarios turísticos, demandan la transformación de nuestros bosques en mansiones de lujo, para atender las urgencias de inversionistas que prometen empleo y bienestar. Aunque, en realidad, las regiones con mayor desarrollo turístico e inmobiliario sean casualmente las más pobres y rezagadas en desarrollo humano, y las que presentan más inequidad y concentración de riqueza.

Ésta es la “demanda insatisfecha” de la que hablan los defensores del plan de contingencia del Gobierno. Y ahora a esto debemos sumarle que nuestro principal socio comercial acaba de sufrir un infarto financiero cuya recuperación va a tomar tiempo, y cuyos efectos no van a tardar en sentirse aquí.

En este escenario de crisis, Costa Rica tiene la oportunidad de impulsar políticas de producción forestal que podrían ser realmente exitosas, con metas de producción que no excedan las áreas aptas disponibles, y con métodos de producción que sean acordes con los ritmos naturales y con las capacidades de carga de cada bosque y de cada región del país. Para ello es necesario mirar más hacia adentro que hacia fuera, y poner los intereses de la comunidad nacional delante de los intereses transnacionales.

En Costa Rica, cualquier plan de desarrollo forestal serio debe partir de una visión solidaria y de largo plazo, ecológicamente responsable, priorizando la protección y restauración de los bosques privados, y la preservación

de las fuentes de agua y de los bancos de biodiversidad. Además, debe apuntar a promover el desarrollo y la producción locales para el abastecimiento del mercado nacional.

No es sensato convertir los bosques de Costa Rica en tarimas para surtir de postres a los estadounidenses, o sacrificar árboles centenarios para adornar lujosas mansiones, para proyectos turísticos y urbanísticos desproporcionados, en las regiones más pobres y vulnerables del país, donde, para colmo de males, los bosques están siendo socolados para abrirle paso a estos proyectos millonarios.

Otro aspecto importante consiste en evitar el derroche y ser más eficientes en el aprovechamiento y producción de madera. Basta darse una vuelta por las oficinas regionales del Ministerio de Ambiente, y observar la madera decomisada pudriéndose en los patios, para darse cuenta de que el desabastecimiento de madera en Costa Rica es un asunto más político que técnico y más demagógico que real.

Los apologistas de la tesis maderera suelen criticar la escasez de cifras en los planteamientos ecologistas. En este sentido, hay al menos tres aspectos a tener en cuenta: (1) en Costa Rica no existe un sistema estandarizado de inventario forestal y de producción de madera, público o privado; (2) cuando los ecologistas presentamos nuestras cifras, no las avalan, y (3) en diversas ocasiones ha quedado demostrado que sus propias cifras nos terminan dando la razón, dependiendo de cómo sean interpretadas. Citamos, por ejemplo, el capítulo ambiental de los informes del Estado de la Nación 2006 y 2007.

A propósito de cifras, después de que la administración Calderón Fournier (1990-1994) fuera galardonada en Alemania con el “Diablo Ambiental” por deforestación, en Costa Rica se ha hecho costumbre que, en cada salida de gobierno, el país reverdezca y se convierta en un vergel, gracias al conjuro oficial. Recordemos la administración Figueres Olsen (1994-1998), cuando el Gobierno anunció que en cuatro años había revertido un proceso de varias décadas con las tasas más altas de deforestación. O la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002), cuando se publicó *El éxito forestal de Costa Rica*, pletórico de cifras y datos, hoy puesto en entredicho por sus propios autores. O la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), que, pese a su gestión ambiental débil e insostenible, se autoproclamó Gobierno de “conquistas ambientales”.

Tal parece que la actual administración de “Paz con la Naturaleza” superará con creces a las anteriores, y que el ambiente y el pueblo costarricenses seguirán siendo los perennes perdedores. De hecho, buena parte de las inclemencias ambientales que hoy azotan a Costa Rica empezaron a gestarse durante la primera administración Arias Sánchez (1986-1990). Y el plan de contingencia es simplemente un ejemplo más de la estrategia del miedo y la manipulación informativa que han caracterizado a este Gobierno.



Aprovechamiento de madera caída sin tractores para uso local, Osa.

Alcides Parajeles